

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN



SALA LABORAL

APELACIÓN - SENTENCIA	
DEMANDANTE	NORA DEL SOCORRO MONTOYA PÉREZ
DEMANDADOS	COLPENSIONES y AFP PROTECCIÓN S.A. MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
RADICADO	05001-31-05-015-2019-00144-01
MAGISTRADA PONENTE	MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO
TEMA	Ineficacia en acto de traslado de régimen pensional, con status de pensionado en régimen de ahorro individual con solidaridad
DECISIÓN	Confirma

*Medellín, dieciséis (16) de julio de dos mil veintiuno (2021)*

*Estudiado, discutido y aprobado en sala virtual*

Esta Sala asume la competencia en esta instancia, conforme a la regulación establecida por el Gobierno Nacional en el Decreto 806 del 4 de junio de 2020 *“por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”*; en concordancia con lo dispuesto en el Acuerdo PCSJA20-11567 del 5 de Junio de 2020 expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

En consecuencia, conforme al trámite establecido en las citadas disposiciones, que habilitan el procedimiento de sentencia escrita, y cumplido el traslado a las partes en los términos reglados, procede la Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín a proferir sentencia ordinaria

de segunda instancia dentro del presente proceso, promovido por la señora **NORA DEL SOCORRO MONTOYA PÉREZ** en contra de **COLPENSIONES** y de la **AFP PROTECCIÓN S.A.**, y dentro del cual se integró la Litis con el **MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO**.

La Magistrada Sustanciadora, **MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO**, declaró abierto el acto y a continuación, después de deliberar sobre el asunto, de lo que se dejó constancia en el **ACTA No 035**, se procedió a decidirlo en los siguientes términos:

### **I. – ASUNTO**

Es materia de la Litis, decidir el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la demandante contra la sentencia que profirió el Juzgado Quince Laboral del Circuito de Medellín, en la audiencia pública celebrada el día 12 de noviembre de 2019.

### **II. – HECHOS DE LA DEMANDA**

Como fundamento de las pretensiones incoadas con la demanda, se expuso, en síntesis, que la señora **NORA DEL SOCORRO MONTOYA PÉREZ** nació el 21 de febrero de 1950, cumplió los 55 años de edad en esa misma fecha del año 2005, y se encuentra inmersa en el régimen de transición pensional.

Adujo que realizó aportes pensionales entre el 1º de enero de 1969 y junio de 2004, alcanzando un total de 1,432 semanas cotizadas.

Informó que en enero de 1997 se trasladó de régimen pensional, pasando del entonces Instituto de los Seguros Sociales a **PROTECCIÓN S.A.**

Se duele que el asesor comercial de **PROTECCIÓN S.A.**, no le brindó una completa y cabal asesoría conforme a la cual le hubiere hecho el respectivo énfasis sobre su condición de beneficiaria del régimen de transición pensional y las consecuencias desfavorables a que se vería abocada al trasladarse de régimen pensional.

Agregó que, PROTECCIÓN S.A. aceptó el traslado de la demandante, no obstante faltarle menos de 10 años para pensionarse.

Indicó que PROTECCIÓN SA, mediante comunicación del 3 de agosto de 2007, cuando la actora contaba con 57 años de edad, aprobó el reconocimiento de su pensión de vejez bajo la modalidad de retiro programado, en monto mensual de \$867.867, a partir de agosto de 2007.

Subrayó que, de haber permanecido en el régimen de prima media con prestación definida, su pensión habría sido superior a la reconocida por PROTECCIÓN S.A., afirmación que sustentó con una tabla de cálculo de la diferencia retroactiva.

### **III. – PRETENSIONES**

La acción judicial está dirigida a que se declare la ineficacia del traslado de régimen pensional que realizó la demandante de COLPENSIONES a PROTECCIÓN S.A., debiendo dejar sin efecto dicha afiliación, declarando que la señora MONTOYA PÉREZ ha permanecido siempre a COLPENSIONES, sin solución de continuidad, y que conserva el beneficio del régimen de transición pensional.

Que se declare que a la demandante le asiste derecho a que su pensión se reconozca con base al Decreto 758 de 1990, con aplicación de una tasa de reemplazo del 90% calculada sobre el IBL resultante del promedio cotizado en los últimos 10 años.

Que, en consecuencia, se condene a PROTECCIÓN S.A. a trasladar a COLPENSIONES los aportes que la asegurada realizó en el RAIS con los respectivos rendimientos y sin ningún tipo de descuento por cuotas de administración; se ordene a COLPENSIONES a recibir esas sumas, reactivar la afiliación de la demandante, reconocer y pagarle retroactivamente la diferencia pensional existente entre la mesada que hubiere recibido en Colpensiones y la que recibe en PROTECCIÓN S.A. Que, asimismo, se ordene a COLPENSIONES continuar pagándole la pensión de vejez en lo sucesivo, con

fundamento en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 como beneficiaria del régimen de transición pensional, aplicando una tasa de reemplazo del 90% sobre su IBL, con los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, la indexación de las sumas objeto de condena y las costas procesales.

#### **IV. – RESPUESTA A LA DEMANDA**

Una vez admitida la demanda, fue debidamente notificada, procediendo las accionadas a dar respuesta a la misma por intermedio de sus respectivos apoderados judiciales (folios 71 y ss. del expediente).

COLPENSIONES respondió la demanda, a través de escrito visible a folios 71 y siguientes del expediente, mediante el cual se opuso a las pretensiones de la demanda; aceptó la edad del demandante, las semanas cotizadas y su traslado al RAIS, negando los demás hechos, y; formuló las excepciones perentorias de *“INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN, PRESCRIPCIÓN, IMPOSIBILIDAD DE CONDENA EN COSTAS, BUENA FE y la EXCEPCIÓN INNOMINADA”*.

PROTECCIÓN S.A. describió el traslado de esta acción, según escrito visible a folios 113 y siguientes del expediente. A través del mismo, se opuso a la prosperidad de las pretensiones invocadas; aceptó la edad de la demandante, las semanas cotizadas y el status de pensionada de la actora, negando los demás hechos de la acción, y; propuso las excepciones perentorias que denominó *“Inexistencia de la obligación y falta de causa para pedir, Buena fe, Pago, Compensación, Prescripción, Aprovechamiento indebido de los recursos públicos del sistema general de pensiones y la excepción Innominada o Genérica”*, entre otras.

#### **Demanda de Reconvención:**

A través de escrito separado, PROTECCIÓN S.A. presentó demanda de reconvención en contra de la señora NORA DEL SOCORRO MONTOYA PÉREZ, pretendiendo que, en caso que se declare la ineficacia del traslado de la demandante al RAIS, se condene a la señora NORA DEL SOCORRO

MONTOYA PÉREZ a reintegrar a PROTECCIÓN S.A. los valores que dicha AFP le ha pagado por concepto de mesadas pensionales, debidamente indexados.

Por su parte, la entidad integrada por pasiva al juicio MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO allegó contestación a la demanda, visible a folios 165 y siguientes del expediente.

A través de la misma aceptó la edad de la demandante, las fechas de afiliación y su status de pensionada, negando los demás hechos; se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda; en punto al bono pensional expresó que el 21 de febrero de 2010 se redimió el mismo, indicando que el mismo no puede ser anulado, modificado o reintegrado, y; formuló las excepciones de *“INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN, IMPOSIBILIDAD DE TRASLADO POR PARTE DE LOS PENSIONADOS, SANEAMIENTO DE LOS VICIOS DEL CONSENTIMIENTO, ANULACIÓN y BUENA FE”*.

## **V. - DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA**

En audiencia pública celebrada el 12 de noviembre de 2019, la Juez de conocimiento absolvió a las demandadas de todas las pretensiones de la demanda, y le impuso condena en costas a la demandante, en favor de cada una de las demandadas.

Sus argumentos consistieron en que, si bien el Despacho no desconocía el deber de información que debe existir en los traslados de régimen pensional, en el presente caso se presentó la celebración de un nuevo acto jurídico completamente informado y voluntario de parte de la demandante, a partir del cual accedió a la pensión de vejez bajo la modalidad escogida.

Argumentó que el hecho de que la demandante hubiere solicitado el reconocimiento pensional y hubiere suscrito la autorización a la AFP PROTECCIÓN SA para negociar su bono pensional en el mercado de valores constituía su deseo de acceder a la prestación económica en el régimen de ahorro individual con solidaridad.

Reseñó que en el nuevo acto jurídico no se presentó ningún vicio en el consentimiento y se acogió a la tesis vertical del precedente jurisprudencial, dictado por esta sala en sesión de unificación del 14 de agosto de 2019.

Agregó que, si bien la demandante contaba inicialmente con el beneficio del régimen de transición, es claro que no cumple con los presupuestos de la sentencia SU 062, ya que el mismo es para regresar en todo tiempo un afiliado, no pensionado.

En punto a los perjuicios solicitados en la demanda, argumentó que los mismos no se causaron, como quiera que para el momento en que la demandante se trasladó al régimen de prima media con prestación definida, aún tenía la posibilidad de retornar a prima media.

Con relación a la demanda de reconvención manifestó que, conforme al sentido de la decisión, al haberse negado la pretensión principal, por sustracción de materia no era necesario emitir pronunciamiento alguno sobre dicha demanda.

## **VI. – RECURSO DE APELACIÓN EN CONTRA DE LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA**

La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por el apoderado judicial de la señora NORA DEL SOCORRO MONTOYA PÉREZ, quien sustentó la alzada expresando que, lo que se está solicitando en la demanda es la declaratoria de ineficacia del traslado de régimen y no del acto jurídico a partir del cual se pensionó la demandante, haciendo ver que, para todos los efectos legales, faltó información al momento del traslado de régimen configurándose la ineficacia, y lógicamente derivándose la misma frente a todo acto que de ese traslado ineficaz se derive. Se duele que a la demandante nunca se le haya hecho una proyección pensional que le mostrara cuales eran las alternativas que más le convenían.

Insistió en la diferencia que se presenta entre la ineficacia y la nulidad de traslado, como sanciones jurídicas, existiendo solo la posibilidad de la

ratificación frente a la segunda, y no frente a la ineficacia, que es la ausencia total de efectos jurídicos.

Puso de presente la expectativa legítima ampliamente configurada y el beneficio del régimen de transición que le asistía a la demandante para el momento en que se trasladó de régimen pensional, merced a contar con más de 35 años y más de 750 semanas cotizadas para el 1º de abril de 1994, situación que le permitiría trasladarse en cualquier momento a Colpensiones, indicando que la demandante, de haber permanecido en prima media, habría alcanzado a pensionarse dos años antes, esto es, a los 55 años de edad.

Argumentó que, si bien la demandante se encuentra pensionada, declarar la ineficacia del acto de traslado y ordenar su retorno a Colpensiones, no constituiría una afectación a la sostenibilidad financiera, en tanto habría compensación de los rubros que la demandante ha recibido retroactivamente a título de mesadas pensionales, lo cual conservaría la equivalencia en el capital. Citó el artículo 334 de la Constitución Política, destacando que la sostenibilidad financiera no puede erigirse en argumento para desconocer los derechos de las personas.

Finalizó solicitando a este colegiado que revise la condena en costas procesales que se impuso a la demandante, la cual considera muy elevada, ya que se impuso pagar un salario mínimo a cada una de las 3 demandadas.

A partir de estas consideraciones solicitó se revoque la sentencia de primera instancia y se acceda a las pretensiones de la misma.

### **Alegatos de Conclusión:**

En la debida oportunidad procesal, la apoderada judicial de la demandante presentó alegatos de conclusión. A través de los mismos solicitó la revocatoria de la sentencia de primera instancia, reiterando los sustentos de hecho y de derecho por los cuales estima procedente que se declare la ineficacia en la afiliación de la demandante, y de contera, en el acto jurídico a

partir del cual entró a disfrutar de una pensión en el régimen de ahorro individual con solidaridad.

Apoyó su solicitud en citas jurisprudenciales y recabó en que, en el expediente obra suficiente prueba para que se declara e la pretendida ineficacia.

Por su parte, el MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO hizo lo propio allegando los alegatos de conclusión. A través de los mismos argumentó que las personas que obtienen el derecho a la pensión quedan imposibilitadas para regresar al régimen pensional anterior; llamó la atención de este colegiado sobre el considerable espacio de tiempo durante el cual la asegurada ha venido disfrutando de la pensión de vejez que le paga PROTECCIÓN S.A.; insistió en la voluntariedad y consentimiento de que estuvieron revestidos los actos jurídicos celebrados por la actora, y; realizó consideraciones de orden financiero y sostenible relacionadas con el bono pensional y los trámites adelantados.

La Dra. Ana María Toro Toro, con TP. Nro. 313.795 del CSJ, como apoderada judicial de COLPENSIONES presentó alegatos de conclusión. Mediante su escrito adujo que esa entidad pública es un tercero ajeno a la situación que comprende este juicio y que no debe verse perjudicada por el error en que incurrió la propia demandante.

Manifestó que, a lo largo del proceso se logró probar que la afiliación de la demandante fue consciente y voluntaria; citó la sentencia de unificación dictada por este colegiado sobre el tema, y luego de hacer algunas citas jurisprudenciales del órgano de cierre, solicitó se confirme íntegramente la sentencia de primera instancia.

Teniendo en cuenta la anterior crónica procesal, se pasa a resolver de fondo, previas las siguientes



## VII. – CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL

Los presupuestos procesales, requisitos indispensables para regular la formación y desarrollo de la relación jurídica procesal, como son demanda en forma, Juez competente, capacidad para ser parte y comparecer al proceso se encuentran cumplidos a cabalidad en el caso objeto de estudio, lo cual da mérito para que la decisión que se deba tomar en esta oportunidad sea de fondo.

**Naturaleza jurídica de la pretensión.-** La Ineficacia en el traslado de régimen pensional.-

El objeto central de esta Litis, se extiende a los puntos objeto de inconformismo planteados por el apoderado judicial de la demandante, que comprende determinar si hay o no lugar a declarar ineficaz el acto de traslado del régimen de prima media con prestación definida al de ahorro individual con solidaridad, teniendo en cuenta que la actora se encuentra pensionada por dicho régimen desde el año 2007.

### **Ineficacia en traslado de régimen pensional:**

En términos generales, la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, ha desarrollado la tesis sobre la ineficacia del traslado entre regímenes pensionales, y luego de haber trazado una línea jurisprudencial desde el año 2008 (Sentencias SL 31.989 del 8 de septiembre de 2008), fue decantando su posición a través del desarrollo de instituciones como *“el buen consejo”*, *“la inversión de la carga de la prueba”*, además de avanzar en la consolidación del concepto propio de la seguridad social, al pasar de entender que, más que tratarse de una simple nulidad, lo que se presentaba con la ausencia de información, era la Ineficacia, como sanción propia del acto jurídico en estos temas (Sentencias SL 33.083 del 22 de noviembre de 2011, SL 46.922 del 3 de septiembre de 2014, SL 19.447 del 27 de septiembre de 2017, y SL 17.595 del 18 de octubre de 2017), concluyó en una pacificada jurisprudencia (**sentencias SL 1452 del 3 de abril de 2019 y SL 1688 del 8 de mayo de 2019**), que en la actualidad continúa manteniendo su mismo sentido (Sentencia SL 3199 de 2020 entre otras).

Esta línea jurisprudencial, parte de destacar, que el deber de información es ineludible; que existe y se hace exigible, desde la propia creación de los regímenes pensionales que introdujo la Ley 100 de 1993, sin importar que, si bien se han promulgado normas más recientes en las que se ha desarrollado el tema (numeral 1º del Artículo 97 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, modificado por el Artículo 23 Ley 795 de 2003; Artículo 9 de la Ley 1328 de 2009 y Decreto 2555 de 2010), se trata de una obligación que deriva de la propia Ley 100 de 1993, que promulgó la existencia de los dos regímenes pensionales, y el derecho a la libre elección.

También ha quedado claro, que a nivel procesal, el tema se rige por condiciones probatorias que le imponen a la respectiva administradora de pensiones acreditar en el juicio que en cada caso concreto sí adelantó la respectiva asesoría; que el primer acto de voluntad es el que se juzga como determinante para la producción de efectos jurídicos en el traslado de régimen pensional, sin que exista la posibilidad de saneamiento de la ineficacia, por asesorías posteriores que se hubieren brindado a los asegurados, después de haber tomado la decisión inicial; que la simple suscripción de un formulario de traslado no denota un proceso serio y cabal de asesoría; no es necesario ni que el asegurado se encuentra ad portas de consolidar el derecho pensional, ni que necesariamente tenga que tener el beneficio del régimen de transición, y; que la prescripción no opera en asuntos en los que se encuentra involucrada la formación del derecho a la pensión.

Es preciso, asimismo, tener en cuenta, que para la Sala de Casación Laboral (SL 1688 de mayo de 2019), *“a diferencia de algunas nulidades que pueden ser depuradas por el paso del tiempo o la ratificación de la parte interesada, la ineficacia es insaneable en cuanto no es posible sanear aquello que nunca produjo efectos”*.

Esta postura es consecuente con los postulados que rigen en materia social, conforme a los cuales en el juicio jurídico sobre los derechos de los trabajadores y los afiliados a la seguridad social, resulta más relevante la realidad que los formalismos; la prescripción no opera en asuntos en los que se encuentra involucrado la formación del derecho a la pensión, y; el primer acto

de voluntad que se juzga como determinante para la producción de efectos jurídicos en el traslado de régimen pensional, es el primero, sin que exista la posibilidad de saneamiento de la ineficacia, por asesorías posteriores que se le brinden al asegurado, después de haber tomado la decisión inicial, o por el hecho de que eventualmente exista movilidad entre varias administradoras pertenecientes al régimen de ahorro individual con solidaridad, ya que *“la oportunidad de la información se juzga al momento del acto jurídico del traslado, no con posterioridad, por lo que un dato será relevante si es oportuno, es decir, si al momento en que se entrega brinda al destinatario su máximo de utilidad”* (Sentencia CSJ SL 1688 de mayo de 2019).

Haciendo un recuento de toda la línea jurisprudencial sobre la ineficacia, para llegar al estado actual de la jurisprudencia sobre el tema, es pertinente citar las providencias del órgano judicial de cierre Corte Suprema de Justicia sentencias 31314 y 31989 de 2008; 33083 de 2011; 12136 y 46292 de 2014; SL9519 de 2015; 47125, SL19447 y SL17595 de 2017; SL3496 y SL4989 de 2018; SL1421, SL1452, SL1688, SL4360 y SL4426 de 2019; STL 3716, STL4001, STL4084, SL2877, SL4811 de 2020, y SL1217 y SL782 de 2021.

Para la Corte Suprema de Justicia, el deber de información a la persona que aspire a trasladarse de régimen pensional, consiste en una completa *“descripción de las características, condiciones, acceso y servicios de cada uno de los regímenes pensionales, de modo que el afiliado pueda conocer con exactitud la lógica de los sistemas públicos y privados de pensiones. Por lo tanto, implica un parangón entre las características, ventajas y desventajas objetivas de cada uno de los regímenes vigentes, así como de las consecuencias jurídicas del traslado”*.

No obstante ser un tema pacífico la generación de la consecuencia jurídica de la ineficacia cuando el fondo privado no prueba en el juicio que verdaderamente suministró una real y absoluta asesoría al afiliado al momento del traslado, ha sido clara la jurisprudencia en el sentido que, cuando se trata de una persona que ya alcanzó el derecho a la pensión en el régimen de ahorro individual con solidaridad y disfruta de ella, *“es una situación jurídica consolidada, un hecho consumado, un estatus jurídico que no es razonable*

*revertir cuando se acredita la ineficacia del traslado, pues ello daría lugar a disfuncionalidades que afectarían a múltiples personas, entidades, actos, relaciones jurídicas, obligaciones e intereses de terceros y del sistema en su conjunto, generando un efecto financiero desfavorable en el sistema público de pensiones –improcedencia de la invalidación del traslado de un régimen a otro cuando quien demanda es un pensionado” (Sentencia SL373 de 2021).*

Esta corporación ha sentado su postura en ese mismo sentido, y fue así como a través de la sentencia de unificación del 14 de agosto de 2019, dentro del proceso con radicado 05-001-31-05-007-2015-01295, expuso que no es procedente la ineficacia de traslado para pensionados, precisamente porque la carencia de información al afiliado, se entiende superada con la celebración del nuevo acto jurídico de pensionado, sin dejar de lado que, acceder a declarar ineficacia cuando ya se ha alcanzado la pensión afectaría la sostenibilidad financiera del sistema, toda vez que con esta decisión pueden verse afectados terceros, como lo es el inversionista del bono pensional, el cual realizó un acto jurídico válido y totalmente legítimo.

La postura de esta corporación resulta consecuente con la distinción entre el momento de la afiliación y aquel en que se empieza a disfrutar la pensión, diferenciación necesaria a efectos de entender que la carencia de información que existía en la afiliación cuando se tenía la condición de afiliado pasa a un segundo plano cuando se accede a los beneficios en el RAIS por parte del asegurado y merced a ello celebra un nuevo acto jurídico que consolida su status pensional bajo las reglas propias del régimen.

A partir de lo anterior, pasa a desatarse la alzada conforme al...

### **CASO CONCRETO**

Sea lo primero reseñar, que conforme a la prueba documental obrante a folios 81 y siguientes del expediente, se advierte que la señora NORA DEL SOCORRO MONTOYA PÉREZ, inicialmente se afilió al ISS (hoy Colpensiones), desde el 1º de enero de 1969 hasta el 31 de enero de 1997, y luego se trasladó a PROTECCIÓN S.A. desde febrero de 1997 donde realizó

cotizaciones que le permitieron acceder a su derecho pensional una vez arribó a los 57 años de edad, bajo la modalidad de renta vitalicia, según Oficio del 3 de agosto de 2007 (fl. 141) y certificado de pagos de folios 37 y ss., que da cuenta de los pagos de mesadas que se le vienen haciendo desde agosto de 2007, fecha de efectividad de la prestación.

Revisadas en detalle las consideraciones de la A quo para arribar a la decisión absolutoria, las mismas consultan la línea jurisprudencial vigente sobre este tema, ya que el status jurídico de pensionada que ostenta la señora NORA DEL SOCORRO MONTOYA PÉREZ no puede ser una situación que se deba desconocer o ser revertida, en tanto se encuentra jurídicamente consolidada.

No se trataría solo de evaluar la falta de información al momento del traslado, sino que el nuevo status de pensionada implica un juicio que comprende otras variables financieras y de riesgo económico que no solo comprenden a la actora y a la administradora de pensiones. En primer lugar, acceder a la ineficacia en estos términos constituiría una afectación a recursos de deuda pública de la Nación como son los derivados de la ejecución del bono pensional, y a su vez resultaría alterador de las operaciones, actos y contratos celebrados entre aseguradoras, AFP, entidades oficiales e inversionistas que intervinieron en la consolidación y rendimientos de los capitales a partir de los cuales se financia la pensión del demandante.

Tampoco puede pasarse por alto que, acceder a la ineficacia significaría una considerable afectación de los recursos de libre disponibilidad en el régimen de prima media con prestación definida, al existir un desgaste financiero por la financiación de la prestación que se ha dado a la demandante.

Es pertinente acudir a lo reseñado por la H. Corte Constitucional, que en Sentencia C-841 de 2003 ha dicho que, *“permitir el traslado de una entidad administradora de pensiones a otra, una vez se ha adquirido la calidad de pensionado puede poner en riesgo la sostenibilidad del sistema, aumentar los costos de los servicios administrativos y financieros, y desestimular la obtención de mayores niveles de rentabilidad a través de inversiones de mediano y largo*

*plazo, dado que la posibilidad de traslado quedaría sujeta al capricho del pensionado”.*

Ahora, si se analiza la situación de la señora NORA DEL SOCORRO MONTOYA PÉREZ, de cara al artículo 2.341 del Código Civil, que establece que quien genera un daño debe repararlo, a efectos de auscultar la eventual causación de perjuicios irrogados por PROTECCIÓN S.A., al haberle hecho incurrir en error por ausencia de asesoría, tales perjuicios se encontrarían afectados por la prescripción extintiva (Sentencia SL 373 de 2021), en tanto pasaron más de 11 años después de la actora haber alcanzado la pensión para elevar las reclamaciones respectivas a las entidades accionadas, teniendo en cuenta que el término de prescripción de la acción para reclamar la indemnización total de perjuicios a cargo de la administradora del fondo de pensiones por la falta de información en el traslado de régimen pensional, se cuenta desde el momento en que se tiene la calidad de pensionada, status que la señora MONTOYA PÉREZ alcanzó desde agosto de 2007.

El apoderado judicial de la demandante se duele que el traslado que la asegurada realizó a PROTECCIÓN S.A. en febrero de 1997, se validó pretermitiendo las reglas legales establecidas en el artículo 2º de la Ley 797 de 2003, ya que para esa fecha le faltaban menos de 10 años para adquirir el derecho pensional. Sin embargo, es preciso indicar que la referida norma, si bien establece esa condición no contempla la consecuencia jurídica que se presentaría frente a la validación de traslados que se validen en contravía de esa disposición, y, de otro lado, ese hecho en nada desvirtúa las consideraciones jurídicas en que la jurisprudencia se ha apoyado para concluir que es improcedente declarar la ineficacia cuando se trata de pensionados.

Es importante que se tenga en cuenta que, si bien la demandante cumplía con las condiciones de ser beneficiaria del régimen de transición pensional tanto por edad como por densidad de cotizaciones a abril de 1994, la hipótesis de recuperación del régimen validada a partir del regreso a prima media conforme a los dictados de la Sentencia SU-130 de 2013, únicamente aplica para afiliados y no para personas pensionadas, que han concurrido a la

celebración de un nuevo acto jurídico, definitivo, que consolida un derecho en su titularidad.

Con relación al inconformismo de la activa con el monto de las agencias en derecho que la A quo le impuso en primera instancia en suma de un salario mínimo legal mensual vigente en favor de cada una de las tres demandadas, al advertirse que la apelación va únicamente dirigida a controvertir el valor de esas agencias, considerándose exorbitantes por la activa, resulta claro que no es esta la oportunidad para resolver ese punto, que al ser estrictamente económico, se rige por la regla establecida en el artículo 365 del Código General del Proceso, conforme al cual es al momento de que se notifique el auto que liquida concentradamente las agencias y costas en el que pueden recurrirse las mismas a través de los recursos ordinarios. De esta manera, queda relevada esta colegiatura para emitir pronunciamiento alguno sobre este aspecto.

A partir de las anteriores consideraciones, la sentencia de primera instancia **será CONFIRMADA íntegramente**, debiéndose condenar a la señora NORA DEL SOCORRO MONTOYA PÉREZ a pagar costas procesales de segunda instancia a COLPENSIONES y a PROTECCIÓN S.A., al haber resultado vencida en el recurso. Agencias en derecho: Medio salario mínimo para el año 2021 en favor de cada una de dichas entidades.

#### **VIII. - DECISIÓN.**

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Tercera de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

#### **RESUELVE:**

**PRIMERO: CONFIRMAR** íntegramente, aunque por razones distintas, la sentencia de primera instancia, de fecha y procedencia conocidas que se conoce en Apelación, de conformidad a lo expuesto en la parte motiva de la presente sentencia.

**SEGUNDO: CONDENAR** a la señora **NORA DEL SOCORRO MONTOYA PÉREZ** a pagar costas procesales de segunda instancia a **COLPENSIONES y PROTECCIÓN S.A.** Agencias en derecho: Medio salario mínimo para el año 2021 en favor de cada una de dichas entidades.

**TERCERO: SE ORDENA** la notificación por estados de esta providencia, y se autoriza su reproducción virtual a las partes del proceso.

**Los Magistrados:**

  
**MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO**  
Magistrada

  
**ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA**  
Magistrado

  
**LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZABAL**  
Magistrada

**EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR  
DE MEDELLÍN – SALA LABORAL - HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por  
estados N ° **125** del **19 de julio de 2021.**

**Consultable aquí:**

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/125>